ACTA DE LA SESION No. 26-12
DEL CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE)

Acta de la sesión número veintiséis del Consejo Nacional de Rectores, celebrada el nueve de octubre del dos mil doce, en el Edificio "Dr. Franklin Chang Díaz". La Licda. Sandra León, Rectora de la Universidad Nacional, quien preside, da inicio a la sesión a las quince horas, con la asistencia de: Dr. Henning Jensen Pennington, Rector de la Universidad de Costa Rica; Dr. Julio César Calvo Alvarado, Rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica; Mag. Luis Guillermo Carpio Malavasi, Rector de la Universidad Estatal a Distancia, y M.Sc. José Andrés Masís Bermúdez, Director de la Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES). Asiste como invitado especial el Lic. Gastón Baudrit Ruiz, Asesor Legal del CONARE

Artículo 1. Audiencias:

a. Dr. Miguel Gutiérrez Saxe. "Plan Estratégico".

EL LIC. MIGUEL GUTIÉRREZ SAXE manifiesta que se va a referir a los aspectos resolutivos del Plan Estratégico y a la propuesta que se plantea en términos relativamente sencillos, no solo sobre el trabajo del CONARE, sino sobre procesos y resultados. Se identifican básicamente cuatro procesos y se plantea una adecuación de la organización, supeditada a la definición de los procesos: financiamiento, planificación, rendición de cuentas y aseguramiento de la calidad y pertinencia y un conjunto de políticas comunes.

En términos reales, el asunto sería, si hubiera acuerdo sobre esas definiciones que pueden ser muy globales, aunque con muchas derivaciones, ir a un taller en el que se trabajaría con los temas más desplegados y en forma bastante explícita. En este taller habría al menos una persona por Universidad, para incorporarla en sus procesos de definición. En ese sentido habría alguna participación de las universidades, pero volvería al CONARE.

El tema, como verán, constituyó un esfuerzo de síntesis importante, con respecto de los mandatos del Convenio, de la Constitución Política, de los acuerdos del CONARE sobre el tema del sistema, y responde mucho a la información recabada en las entrevistas que realizaran entre los meses de julio y agosto de este año.

Procede a indicar los cuatro ejes fundamentales de trabajo:

1. Financiamiento. Un FEES con fuentes establecidas y crecientes y un claro límite respecto a la proporción para la educación superior pública, el gasto público total nacional en educación y proporción del producto interno bruto. Operación como fondo, no solo como flujo de recursos, con derivaciones de titularización y uso de fideicomisos. Un marco de mayor certidumbre que permita precisar la expansión y los límites de crecimiento, matrícula y graduación -el CONARE hizo la observación de que tenían que explicitarse otros aspectos-, la presencia del valor equidad, criterios de distribución y el establecimiento de una salvaguarda de crisis en alguna institución.
2. Planificación. Hacia el desarrollo de la planificación territorial creciente y selectiva, hacia algunas zonas o regiones en donde operen varias universidades y exista acompañamiento de sectores sociales, temática en pocos asuntos de carácter estratégico, centrado en la generación de métodos de formulación, evaluación ex ante y el diseño de acciones, procesos, resultados, monitoreo y evaluación.
3. Proceso, rendición de cuentas y aseguramiento de la calidad de la pertinencia hacia la sistematización de la investigación, sus parámetros de calidad y la extensión y acción

social. El desarrollo de estudios sobre la educación superior asociados a redes internacionales sobre el tema y sobre el seguimiento global. La generación de indicadores de gestión para resultados. La sistematización y el apoyo a la acreditación y la autoevaluación y el registro de calidad de la educación superior pública es la orientación central. Se acompañará con el fomento de normativa nacional, para regular el derecho y la inspección del Estado sobre la educación superior privada y la coordinación en lo que corresponda con la educación superior privada. Es fomentar, desde CONARE, que se norme este derecho a la inspección.

LA LICDA. SANDRA LEÓN considera que estarían asumiendo una responsabilidad en cuanto a la vigilancia de la calidad de la educación privada.

EL LIC. MIGUEL GUTIÉRREZ aclara que no como tal, salvo en algunos aspectos como el seguimiento de graduados que ya se acordó que fuera público y privado y, según entiende, también hay una disposición para llevar estadísticas universitarias públicas y privadas, establecer un centro como tal. En ese sentido habría responsabilidad, pero no más allá.

En cuanto al concepto "fomento", vale la pena recordar que cuando se planteó el sistema de acreditación, la Comisión de Enlace, a principios de los noventas, acordó que sería una acreditación voluntaria, pero paralelamente el Estado desarrollaría una legislación para normar el derecho de inspección. Esta segunda parte nunca se dio, no hay una normativa para una inspección de la educación que es constitucional, pero que no tiene su ley correspondiente. En este caso se dice que hay que fomentar que eso se dé.

4. Políticas comunes. La orientación general, la coordinación y la articulación de la educación superior pública. Sin embargo, se tendrán como políticas públicas, las siguientes: especialización por método; virtual a distancia y por objeto (establecimiento de áreas para el desarrollo común, la aceptación de liderazgos en muy pocas áreas, o, para el resto, la definición de áreas en donde pudiera surgir competencia. Se desarrollarán como espacios comunes algunas áreas instrumentales, seguimiento de estudiantes antes de incorporarse, durante su vida universitaria y una vez graduados. La admisión e inclusión social, la renovación de políticas de capacitación, los regímenes de salarios y académicos, la virtualización y el desarrollo de las tecnologías de información y la innovación. Adicionalmente se mencionan como las áreas de carácter sustantiva, al menos las siguientes: sistema educativo, fortalecimiento institucional, el Estado y sus cuadros, seguimiento del desarrollo humano sostenible nacional y centroamericano, desarrollo científico tecnológico. Estos y otros temas serán objeto de trabajo en el taller.
5. Estructura. La remodelación y adecuación de la estructura del CONARE. Adicionalmente y en sustitución de la operación mecánica, se orientará a seleccionar bajo criterios, la adaptación de otros esquemas de cooperación: fuerzas de tarea, equipos especializados, comisiones de coordinación, frutos de trabajo para algunas regiones y zonas del país, unidades organizacionales, direcciones de departamentos y programas. Se tendrá como propósito descongestionar al CONARE de decisiones administrativas, de menor importancia y facilitar la concentración de estos esfuerzos en lo estratégico y el seguimiento de sus decisiones.

Los anteriores serían, a grandes rasgos, los cinco ejes, luego estarían los pasos y, fundamentalmente, seguiría sería el taller en donde cuatro grupos específicos trabajarían en la precisión de financiamiento, rendición de cuentas, planificación y políticas comunes. Sería

fundamentalmente gente de la organización con alguna de las universidades. Y si quisieran involucrarse en este proceso, sería algo que garantizaría un desarrollo de acontecimientos mucho más sencillo, lo cual queda sujeto a la decisión de la Rectora y los rectores.

LA LICDA. SANDRA LEÓN pregunta cómo viene descrito lo de salarios y cuál sería el alcance definido en ese sentido. Lo pregunta porque encuentra que el tema es complicado.

EL LIC. MIGUEL GUTIÉRREZ responde que estaría descrito dentro de las políticas comunes, ahí se indica que se desarrollarán como espacios comunes algunas áreas instrumentales sobre medios, entre ellas, los regímenes de salarios y académicos. Se desarrollarán como espacios comunes, tema que en un convenio parece un área sistémica. Quedaría un gran margen de oportunidad. Se trata de crear un espacio común de acción, de políticas comunes, sin que la homologación sea la única política posible.

LA LICDA. SANDRA LEÓN considera que es razonable que los regímenes académicos con los perfiles de las universidades tengan sus diferencias.

EL LIC. MIGUEL GUTIÉRREZ agrega que todo eso está indicado en el marco general.

EL DR. HENNING JENSEN manifiesta que le parece muy bien lo indicado por don Miguel Gutiérrez.

LA LICDA. SANDRA LEÓN con respecto al taller, expresa que tendrían que cambiar la tarde de trabajo del CONARE por un día de trabajo en el taller, si la decisión fuera la de estar en él.

EL LIC. MIGUEL GUTIÉRREZ agrega que habría que preparar un procedimiento, hay materiales para desarrollar el proceso del día de trabajo, habría que afinar algunas cosas. Piensan que el taller podrían realizarlo en un par de semanas, de manera que los grupos puedan continuar trabajando en la definición de los procesos y tener en febrero una retroalimentación para el CONARE sobre el trabajo final.

La participación de los rectores podría entenderlo sin perjuicio de la participación de quienes ya habían mencionado: Vicerrector de Administración de la Universidad de Costa Rica, el Director del Programa de Autoevaluación Académica de la UNED; la Directora del Doctorado en Políticas Públicas del CICAP y de la Directora de Planificación de la Universidad Nacional. Es decir, que pudieran contar con ellos además de la Rectora y los rectores.

EL MAG. LUIS GUILLERMO CARPIO considera, en el caso de la UNED, que la gente del área de planificación podría aportar mucho y él podría hacerse acompañar por ellos o que lo sustituyan en alguna discusión específica.

Los miembros del CONARE expresan su intención de participar en el taller propuesto.

LA LICDA. SANDRA LEÓN sugiere que el Taller se lleve a cabo el martes 6 de noviembre, y concluye la audiencia agradeciendo a don Miguel Gutiérrez su participación este día y el trabajo que ha venido realizando por encargo del CONARE.

Se retira el Dr. Miguel Gutiérrez, luego de agradecer la atención recibida de la señora y señores rectores.

Sin más que discutir sobre el tema tratado,

SE ACUERDA realizar el Taller propuesto por el Coordinador de la formulación del Plan Estratégico del CONARE el martes 6 de noviembre, a partir de las 9 am y que se invite a participar en él a las personas propuestas por el Dr. Miguel Gutiérrez.

- b. Dr. Fernando Ferraro, Ministro de Justicia. Veto al Decreto Legislativo 9054 “Reforma de varios artículos de la Ley No.8039, Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, de 12 de octubre y sus reformas.

LA LICDA. SANDRA LEÓN da cordial bienvenida al señor Ministro de Justicia, Dr. Fernando Ferraro, para que les presente la posición del Ministerio a su cargo y del Gobierno con respecto a la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y sus reformas.

EL DR. FERNANDO FERRARO manifiesta que desde el año 2010 la Asamblea Legislativa le consultó al Registro Nacional de Derechos de Autor su criterio con respecto al Proyecto de Ley que formuló el diputado José María Villalta. En ese año el Registro Nacional de Derechos de Autor contestó oponiéndose al proyecto con base en argumentos técnicos. Él desconoce la razón por la que la Asamblea decidió ignorar el criterio del Registro Nacional de Derechos de Autor, el cual forma parte del Ministerio de Justicia.

Costa Rica tiene varias cuentas pendientes en materia de derechos de autor, problemas que no son de naturaleza legal, pero que existen por malas interpretaciones o por la desinformación que hay en el ambiente. La Directora del Registro, señora Vanessa Cohen, ya le había hablado reiteradamente del asunto y hace cuatro meses, al asumir el cargo de Ministro, ya traía el tema para analizarlo desde la Comisión Institucional para la Protección de la Propiedad Intelectual. Y justamente a las semanas de estar en el cargo de Ministro, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley que los ocupa.

La legislación costarricense no prohíbe la reproducción de obras con fines académicos y esto se deriva de la excepción académica del artículo 73, último párrafo, de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, y el Artículo 74, también último párrafo, de la Ley de Observancia. En ambos textos se establece en un sentido muy amplio, que cuando se realiza con fines académicos la reproducción de cualquier obra, no solamente el fotocopiado, es lícito y por lo tanto no está sujeto a ninguna sanción. Pero esa protección que se deriva de la excepción académica, cubre tanto al usuario que promueve la reproducción de una obra con fines académicos, como a la persona, física o jurídica, que le da el servicio necesario para llevar a cabo esa reproducción.

Entonces, desde el punto de vista legal, no es cierto que el estudiante y el docente estén protegidos y el fotocopador no. Lo que sucede es que esto abarca cualquier tipo de reproducción y cualquier tipo de obra, porque la excepción académica en la legislación costarricense está planteada en términos muy amplios. Esto constituye una ventaja porque permite que abarque prácticamente cualquier supuesto de la vida diaria, incluso la evolución tecnológica que hace que la reproducción de obras pueda hacerse por diferentes medios, mucho más sofisticados que el simple fotocopiado, pero este no está descartado.

Parte de los errores en la comprensión de este tema tiene que ver con interpretaciones absolutamente restrictivas que se están haciendo. Es decir, el texto está planteado en términos muy amplios, en materia de prohibiciones y de sanciones, jurídicamente las interpretaciones que

se hagan, no pueden ampliar la sanción o la prohibición hacia aquello que no está expresamente prohibido o para lo que no haya expresamente una sanción. Está prohibido lo que expresamente está prohibido y solamente se puede sancionar aquello que expresamente esté sancionado.

Con base en ese principio, insiste en que la normativa, en cuanto a producción académica, de los dos artículos que citó, es suficientemente amplia. Se ha encontrado con personas que le han dicho que la excepción académica está mal planteada porque habla de obras literarias y no van a fotocopiar únicamente a Shakespeare o El Quijote. Literatura es cualquier conjunto de obras de una ciencia o un arte, por lo que él no puede entender cómo obras literarias se limiten únicamente a novelas o cuentos. Abarca eso y también los libros más complejos de una Escuela de Ingeniería o Medicina y muchas más. No puede entender que al referirse la normativa específicamente –porque lo menciona en forma expresa-, a antologías, no estén incluidos compendios o compilaciones

En el Ministerio de Justicia, en el Registro de Derechos de Autor y de Propiedad Intelectual no han cambiado de criterio con respecto a este tema. En los periódicos salió publicado un informe del año 2009 donde ya la Comisión Institucional de Protección a la Propiedad Intelectual hablaba de manera técnica y bastante amplia sobre todo esto. El último párrafo de Artículo 54 en que se establecen las sanciones, no se refiere a la persona que presta el servicio, física o jurídica, sino al usuario porque si una persona promueve la reproducción de una obra, como en el caso del fotocopiado y va donde aquellos que hacen este trabajo, difícilmente lo hacen estos sin ánimo de lucro. En general los servicios que operan en este campo lo hacen en esa forma.

La Ley se refiere a que quien promueve la fotocopia debe usarla con fines académicos, para estar dentro de la excepción establecida. Si se sacan fotocopias para ir a venderlas, ya no se está dentro del supuesto que ampara la excepción académica. El ánimo de lucro hay que buscarlo del ánimo del usuario y no del lado del que fotocopia o reproduce. El ánimo de lucro se refiere al fotocopador, al que presta el servicio. Tenía que haberlo dicho de manera expresa la Ley porque no tiene ningún sentido que al reconocer el derecho, al mismo tiempo se eliminen los mecanismos que lo hacen efectivo. No se puede ignorar un derecho que se está reconociendo.

¿Por qué es relevante ese informe de la Comisión del año 2009?: por dos razones. La composición de la Comisión, la integran representantes de los ministerios de Justicia, Comercio Exterior, Ciencia y Tecnología y Seguridad Pública. La Comisión de Registro de Propiedad Intelectual, el de Propiedad Industrial y el de Derechos de Autor, está formada por la Dirección General de Aduanas, la Escuela Judicial que es la que forma los jueces que estarían llamados a tratar los problemas de propiedad intelectual, el Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía General de la República. Es en estas instituciones donde se ha dicho que en Costa Rica la reproducción de obras con fines académicos no está prohibida. Y ese derecho que ampara a quien promueve la reproducción, es el que ampara también a quienes prestan ese servicio.

Además, la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos y la Ley de Observancia, remiten de forma expresa al Registro de Derechos de Autor, cuando hablan de la interpretación de esas normas. Ya no se habla entonces de un registro cualquiera que da una opinión marginal sobre el asunto, sino que están hablando de la entidad técnica que la Ley autoriza para realizar interpretaciones cuando hay procesos judiciales administrativos. Evidentemente, se trata de un criterio relevante en cualquiera de los casos.

En Costa Rica, durante todo el tiempo en que han estado vigentes estas normas, no se han producido denuncias ni procesos judiciales contra personas que hayan promovido la reproducción

de cualquier obra o contra quienes han brindado el servicio. Y esto es relevante porque precisamente los que están diciendo que no hay fundamento jurídico para una persecución de este tipo, son las entidades llamadas a perseguir, a investigar, a procesar y administrar justicia en caso de una relación. O sea, ya no es solo el Registro de Derechos de Autor.

Con respecto al proyecto de ley que promovió el Diputado Villalta, y tiene que hacer un paréntesis, decía al principio que el problema existe, pero no es de naturaleza legal. No se puede ignorar que en la opinión pública de este país haya un malentendido bien consolidado alrededor de este tema porque, ciertamente, lo que está diciendo públicamente no se entiende así y al mismo tiempo, como antecedente de todo esto, hay una cantidad de notas de diferentes personas, no solo de las que fotocopian, que decidieron amenazar con denunciarlos y enviarlos a prisión, si se realiza la reproducción de obras.

Una de las entidades responsable de estas amenazas es la Cámara del Libro, y quien firmó las notas fue la Licda. Gloria Navas, pero ella ya no es la Asesora Legal de la Cámara del Libro. Esta ha revisado su posición sobre este tema de manera significativa y esta tarde el Presidente de la Cámara del Libro estuvo en la Universidad Técnica Nacional en reunión con el Consejo Universitario y dijo lo que él está comentando y además que ellos no objetan, ni cuestionan lo que está establecido en los artículos que citó. Aquí si hay un cambio de posición porque no es la tesis que sostenía hace unos años.

El proyecto de ley propuesto del diputado Villalta tiene cuatro reformas: dos se refieren al fotocopiado –artículos 54 y 73-, y otras dos introducen cambios en derechos de autor que van mucho más allá del tema de la excepción académica. Estas, lo que hacen es abrir la reproducción de obras de una manera distinta a como está regulada en este momento, debilitan la protección de manera sensible, casi la vuelven inocua. Y esto afecta en general la industria creativa y tecnológica del país. Prácticamente en estos dos puntos el proyecto de reforma es un caballo de Troya que va a quebrar servicios bastante grandes porque prácticamente deja libre temas como la piratería.

Entre los argumentos utilizados para justificar lo anterior –sin hablar de las dos reformas que se refieren a la reproducción de obras con fines académicos-, está que la legislación en materia de sanciones, es desproporcionada. Qué es lo que sucede en Costa Rica, pues que hay un régimen escalonado que va desde multas hasta prisión y deja en manos del juez valorar el caso concreto, pero le impone desde la Ley que debe haber proporcionalidad entre la sanción y el caso que se sanciona. O sea, la prisión se reserva para casos calificados de piratería, no es el primer recurso al que puede acudir el juez a la hora de sancionar. Y en el caso del fotocopiado, para que una persona que fotocopia -no con fines académicos-, esté sujeta a la multa menor que establece la sanción aplicable -no se le puede aplicar prisión-, debe generar un perjuicio económico que alcance por lo menos medio salario mínimo. Las leyes costarricenses que si incluyen penas de prisión, tienen ese carácter proporcional y escalonado y deja en manos del juez la gravedad del caso.

En cuanto a las dos reformas que tienen que ver con excepción académica, hay un error enorme en el proyecto del diputado Villalta, en el artículo 54 de la Ley de Observancia, último párrafo - está seguro que no fue esa la intención, pero el resultado fue un error-, a la normativa actual le agrega un párrafo que dice: “igualmente se aplicará para estudiantes y docentes, cuando obtienen servicios de fotocopiado”. El diputado Villalta en el texto que propone no elimina el concepto de ánimo de lucro y tampoco el de abusos debidos. Si la interpretación correcta es la de los proponentes del proyecto, sin ánimo de lucro se refiere a quien presta el servicio.

El agregado que ellos estiman al artículo actual, introduce el concepto de servicios de fotocopiado que no está expresamente en la Ley porque como está, no se refiere a quien da el servicio, sino a quien promueve la reproducción de la obra. La ley actual habla de reproducción únicamente, y este concepto está definido en la parte de definiciones de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. La Ley no habla de servicios y por lo tanto, se debe entender donde dice “de igual forma se aplicará a los servicios de fotocopiado” que el ánimo de lucro se aplica a los servicios de fotocopiado y antes no estaba planteado en esos términos.

Además, la reforma introduce otro concepto, coloca la excepción académica para estudiantes y docentes. La legislación actual se limita al objeto del acto, o sea, la reproducción con fines académicos, no se refiere a los sujetos que realizan el acto. Eso significa que en Costa Rica hay una presunción a favor del particular que promueve la reproducción de obras. En este momento, ningún servicio de reproducción está obligado a pedirle a la persona que solicita una fotocopia, que se identifique para saber si es docente o estudiante, porque eso no interesa en la normativa actual.

En cambio, en la reforma que promueve el diputado Villalta, se habla específicamente de estudiantes y docentes, lo cual significa que el copista en cualquier empresa que presta el servicio, además de no tener ánimo de lucro, para conformar el supuesto que permite la excepción académica, va a tener nada más que solicitar la identificación de la persona como estudiante o como docente. Entonces, si se lleva a fotocopiar capítulos de un libro y no se puede identificar como docente o estudiante, no le podrían hacer la fotocopia. Pero eso no lo indica en ninguna forma la legislación vigente.

Lo anterior es el resultado de una tendencia que hay en Costa Rica, desde hace bastante tiempo, de que la legislación en el ordenamiento jurídico, tiende a que este se vea cada vez más frondoso y por lo tanto menos apto para abarcar los diferentes supuestos de la Ley y adaptarse a la evolución de la realidad.

En Costa Rica se tiene una Constitución que a punta de reformas parece una Ley Orgánica y se tienen unas leyes que son tan detalladas que parecen reglamentos y tienen poca capacidad de adaptación a la ley y a abarcar los diferentes supuestos. La virtud de la legislación actual en materia de excepción académica es tan amplia que permite abarcar diferentes supuestos y adaptarse a la realidad.

Si se tratara de una ley que autoriza el transporte público, estarían criticándola porque dice que se autoriza el servicio, pero no es el servicio de taxi. La razón por la cual se promueve el veto tiene que ver con el perjuicio que el proyecto le causaría a la industria y a la industria tecnológica del país. El proyecto Villalta restringiría la situación actual en una forma que no está prevista en las leyes que rigen actualmente esta materia.

Queda pendiente, sin ninguna duda, que todo esto que está expresando, salga a la luz pública, es el trabajo que iban a comenzar a hacer hace cuatro meses, cuando se suelta esta tormenta que desembocó en ese problema en la Asamblea Legislativa. Pero la preocupación relacionada con la excepción académica no tiene ningún fundamento en la legislación costarricense.

EL DR. HENNING JENSEN agradece profundamente la presencia de don Fernando Ferraro y agrega que la Administración Superior de la Universidad de Costa Rica conoce muy bien los alcances y las limitaciones de toda la legislación costarricense relativa a la propiedad intelectual y

a los derechos de autor. Y saben muy bien que lo que ha manifestado el señor Ministro está totalmente acorde con el texto de las diferentes leyes que existen. También ha apuntado dónde ha estado el problema y este ha sido efectivamente muy serio. Tan serio que han hecho una realidad de una interpretación caprichosa, a ratos grosera y en muchas ocasiones también impertinente, de la legislación vigente.

Saben muy bien que tienen el derecho a la reproducción por los medios tecnológicos que existan de los textos de obras literarias en el sentido amplio, como se indicó, pero llevan varios años de un verdadero hostigamiento de parte de la Cámara del Libro. Un hostigamiento que ha llegado al punto de decirle a las personas, tanto intra muros como extra muros, de las instituciones de educación superior, que la reproducción de obras con fines académicos es un delito.

Entiende perfectamente que la Asesora Legal de la Cámara del Libro ha cambiado, pero tiene una carta de la Cámara del Libro en la cual le dicen –y la reciben hoy muchos centros de fotocopiado y muchos universitarios-, que “él concluye de manera simplista que es permitida la reproducción de obras con fines académicos y sin fines de lucro. La carta es bastante extensa y en ella le dicen también que “él incurre en el error de olvidar que el centro de fotocopiado tiene fines de lucro y por lo tanto puede estar cometiendo un delito”. Y así sigue la carta. En todo caso, se trata de una misiva identificada como Bufete Navas y Navas, Licda. Gloria Navas, que es ofensiva, hostigadora, intimidante y absolutamente impertinente e inaceptable.

Esta interpretación, que es una ficción y que no corresponde con el texto de la Ley, es lo que se convirtió en realidad en miles de universitarios. A las autoridades universitarias les ha sido sumamente difícil contrarrestar la versión de la Cámara Costarricense del Libro. En realidad, les ha sido imposible. Él se ha manifestado sobre este asunto en el año 2009 y lo ha vuelto a hacer recientemente, más o menos en los mismos términos, pero la Cámara Costarricense del Libro, de la cual la Universidad de Costa Rica es miembro, ha insistido en el mismo punto de vista y han intimidado a la gente.

Ahora, como autoridades universitarias se acercan a los y las estudiantes y les dicen que es permitida la reproducción, nadie va a ir a la cárcel por eso, pero ¿cuál es la respuesta? Dénsese una vuelta por los centros de fotocopiado, donde hay rótulos que dicen: “aquí no fotocopiemos libros de tales editoriales”. La intimidación ha tenido resultados, pero no de una manera tan agresiva como la de la Cámara Costarricense del Libro, pero sí han jugado un papel, y eso provocó la manifestación de hoy que terminó en una forma muy lamentable. Los informes que le han llegado durante toda la tarde es que no se han involucrado los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, más bien comparte la información de que los encapuchados que participaron en esa agresión, también invadieron la Universidad de Costa Rica hoy, tuvieron la pretensión de tomar sus instalaciones y también las oficinas de la Federación de Estudiantes. De ahí que se diera una participación de la seguridad interna de la Universidad.

En todo caso cree que tienen un reto compartido muy importante y es, por un lado, lograr que las cámaras tengan una actitud más acorde con la Ley, o sea, más tolerante, más permisiva, dentro de la línea que fija la Ley, y no solo la de aquí, sino que internacionalmente se permite el uso legítimo y razonable, con fines académicos. Cree que de ninguna manera podría ser propio poner a los estudiantes un ejemplo de música, permitirles un extracto de una obra de Beethoven –sabe que Beethoven no tiene derecho de autor, es algo de dominio público-, el que tiene los derechos de autor es el intérprete y el disco compacto está protegido. Todas esas excepciones académicas que sean legítimas, razonables, debería ser algo sobre lo cual como sociedad se debe tener consenso y que no exista el temor de ser perseguido legal e incluso penalmente. Y

hacia eso apuntan los oficios que, como a él, también han sido dirigidos a muchas personas por parte de la Cámara Costarricense del Libro.

Recomienda hacer un esfuerzo por recuperar la razonabilidad y la racionalidad, para que este conflicto ya encendido, logre encausarse. Y con todo respeto tiene que decirle al señor Ministro que ahí tienen una gran tarea por realizar porque esto se volvió parte del pensamiento de las personas. Y repite, es el resultado de años de intimidación.

EL DR. FERNANDO FERRARO aclara que esas notas amenazantes que dieron vuelta por todas partes fueron elaboradas no por la Cámara Costarricense del Libro sino por una editorial el 3 de marzo de este año. El Registro de Derechos de Autor, por diferentes razones, y la Comisión que hicieron público ese criterio en el año 2009, no pasaron de la publicación en un medio de circulación nacional, y una página de un periódico no alcanza para revertir el esfuerzo enorme que se estaba haciendo desde el otro lado.

EL LIC. GASTÓN BAUDRIT solicita permiso para proyectar los artículos de la ley vigente que se refieren a la excepción académica. Luego del análisis de los términos, sugiere al señor Ministro la conveniencia de que la interpretación que ha expresado en la sesión y que entiende es compartida actualmente por la Cámara del Libro pudiese servir de texto para una interpretación auténtica de la ley que el Gobierno de la República encauzara hacia la Asamblea Legislativa. Explica su propuesta en el sentido de que si bien la posición del Gobierno - y aún la posibilidad de incluir esta en un decreto ejecutivo - es muy importante, la mayor seguridad jurídica sobre la aplicación de la ley y su excepción académica la daría solo una interpretación auténtica.

EL DR. FERNANDO FERRARO se muestra anuente a considerar una propuesta del CONARE en el sentido expuesto por el Lic. Baudrit.

Los señores y señora rectores agradecen al señor Ministro de Justicia su presencia en esta sesión así como su amplia y detallada explicación sobre el tema de la excepción académica y su interpretación. Se manifiestan asimismo dispuestos a colaborar en la forma que sea pertinente con el fin de que se pueda poner fin a la incertidumbre y efectos negativos que han rodeado la aplicación de la legislación vigente.

Artículo 2. Financiamiento y presupuesto
OPES-MEMO-178-2012 de 28 de setiembre de 2012. Aprobación modificación presupuestaria 03-2012.

SE TOMA NOTA.

Artículo 3. Aprobación de Actas
En discusión las actas de las sesiones del Consejo Nacional de Rectores N°s. 24-12 y 25-12, celebradas los días 18 y 25 setiembre del 2012, respectivamente.

SE ACUERDA EN FIRME aprobar las actas 24-12 y 25-12, celebradas los días 18 y 25 setiembre del 2012, respectivamente.

Artículo 4. Programas y Comisiones
a. Correo electrónico de 21 de setiembre, 2012 del Programa Estado de la Nación. Adjuntan la propuesta de texto de presentación para el Decimoctavo Informe del Estado de la Nación.

EL M. SC. JOSÉ ANDRÉS MASÍS indica que son dos cosas: una propuesta para el texto de presentación del Informe y que la fecha de presentación sea el 6 de noviembre próximo. Y la otra es que habría una rueda de prensa en la mañana y a partir de las 6 p.m. sería la presentación. Ya él leyó el texto y no encuentra que haya nada fuera de lo normal en él.

SE ACUERDA EN FIRME acoger la propuesta de presentación para el XVIII Informe Estado de la Nación el 6 de noviembre próximo.

- b. Oficio CENIBiot-189-2012 de 26 de setiembre, 2012: remite propuesta de proyecto para la participación en la convocatoria de proyectos del FEES.

EL M. SC. JOSÉ ANDRÉS MASÍS explica que conversó con la Directora del CENIBiot, quien le informó que analizaron con detenimiento la solicitud planteada y definieron no participar esta vez en la convocatoria de proyectos del FEES. Por tal razón, se deja sin efecto la solicitud planteada mediante el documento CENIBiot-189-12.

SE TOMA NOTA.

- c. MEMO-DA-89-2012 del 24 de setiembre de 2012 de la División Académica, sobre el apoyo técnico del Equipo de Evaluación de la División Académica a los procesos previos para la acreditación de carreras.

EL M. SC. JOSÉ ANDRÉS MASÍS explica que se trata de la solicitud del CONARE para que acompañaran a los procesos de evaluación tendientes a acreditación de las carreras del proyecto con el Banco. Ellas dicen que lo hacen con todo gusto, y para tal efecto solicitan que se les indique quiénes van a ser los interlocutores de cada universidad para coordinar el trabajo. Estima que podrían ser los vicerrectores de docencia como vía de entrada.

LA LICDA. SANDRA LEÓN les recuerda que el CONARE les había planteado que como tenían que enfrentar una tarea tan grande como es el aumento de carreras en procesos de acreditación con el Banco Mundial, sería muy apropiado que ellas integraran los equipos de las universidades para realizar este tipo de trabajo. Ellas no tienen la experiencia en acreditación, pero sí en seguimiento de carreras que es uno de los puntos en que las carreras que se acreditan son valoradas.

Ahora la pregunta es, si eso es viable, cómo las integran al trabajo y por eso don José Andrés sugiere que sea con los vicerrectores de docencia. Podrían comenzar a trabajar con ellos y que en una reunión establezcan las estrategias y los lineamientos para el trabajo conjunto.

SE ACUERDA solicitar a la Comisión de Vicerrectores de Docencia y a la División Académica de OPES que se reúna para establecer las estrategias de acompañamiento para los procesos de evaluación y acreditación de las carreras que se beneficiarán con los recursos del Proyecto de mejoramiento de la educación superior”.

- d. Oficio CNR-PEN-766-2012, de 24 de setiembre de 2012. El Estado de la Nación solicita la presencia de los señores Rectores en la mesa principal durante la conferencia de prensa del lanzamiento oficial del Decimotavo Informe Estado de la Nación (2011), a realizarse el 6 de noviembre a las 9:00 a.m.

SE TOMA NOTA de la información relativa a la conferencia de prensa para el lanzamiento

oficial del Décimo Octavo Informe del Estado de la Nación (2011) que se realizará el 6 de noviembre.

- e. OF-DC-COMVIVE-62-2012 de 24 de setiembre, 2012. La Comisión de Vicerrectores de Vida Estudiantil remite documento sobre estudio financiado con Fondos del Sistema "Estilos de vida en Costa Rica: estudiantes universitarios de primer ingreso". Asimismo, solicitan audiencia para el equipo que tuvo a cargo el estudio, con el fin de ampliar más sobre el tema.

SE ACUERDA otorgar la audiencia que solicita la Comisión de Vicerrectores de Vida Estudiantil para la discusión del estudio Estilos de vida en Costa Rica: estudiantes universitarios de primer ingreso". La Secretaría del CONARE coordinará lo relativo a la programación de la audiencia.

- f. MEMO-DA-92-2012, de 2 de octubre, 2012. La Comisión de Directores de Posgrado solicita información sobre los resultados y las acciones a seguir acerca de la visita realizada al CONARE el 14 de agosto de 2012.

LA LICDA. SANDRA LEÓN les recuerda que en esa reunión se dijo que iban a provocar una reunión conjunta con los sistemas de posgrado de las cuatro universidades y el SINAES, para hablar sobre el tema. Se les podría informar en ese sentido y que don José Andrés Masís los acompañe como representante del CONARE.

SE ACUERDA EN FIRME que el señor Director de OPES, M. Sc. José Andrés Masís, coordine la realización de una reunión con la Comisión de Posgrado y el SINAES, para que se conozca la información analizada en las reuniones que el CONARE sostuvo con ambas instancias.

- g. DCA-775-2012 la Facultad de Ciencias Agroalimentarias manifiestan su apoyo al proyecto VII Congreso de la Red Latinoamericana de Ciencias Ambientales que se realizará en noviembre de 2013.

EL M. SC. JOSÉ ANDRÉS MASÍS indica que se averiguó y al CONARE no ha llegado ninguna propuesta para realizar ese VII Congreso de la Red Latinoamericana. La Comisión de Investigación les informó que apenas están comenzando a tomar el tema. Le parece que convendría acusar recibo e indicarles que todavía el CONARE no ha recibido ninguna propuesta de organización ni de apoyo, para la organización de este Congreso y que cuando se presente pues sería considerada.

EL DR. JULIO CÉSAR CALVO explica que este Congreso se organiza un poquito a destiempo pues es para el año entrante y una actividad de esa magnitud requiere mínimo un año de anticipación. A él le presentaron la propuesta en la que indicaban que ocupaban varios millones de colones, para pagar la inscripción de un número de participantes de las universidades. O sea, que las personas que participaran tuvieron cobertura total. Él les dijo que el problema era que todo lo del FEES estaba repartido. Le hicieron entonces otro planteamiento y él les dijo que no podía, como Rector del Instituto Tecnológico, presentar algo que no se ha concretado.

Agrega que este tipo de iniciativas ellos las apoyan, pero es bueno hacer la aclaración de que no se ha concretado nada y que ya todo se repartió. Además, que no se tiene claro qué es lo que están solicitando. Pero hay que decirles algo porque si no quedaría planteada la solicitud y pensarían que se les va a apoyar y finalmente tendrían que correr.

LA LICDA. SANDRA LEÓN considera que deberían orientarlos en el sentido de que los fondos del sistema ya están distribuidos.

SE ACUERDA indicar al señor Decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica, Dr. Luis Felipe Arauz Cavallini, que el CONARE no ha recibido ninguna propuesta por parte de los organizadores del VII Congreso de la Red Latinoamericana de Ciencias Ambientales. Asimismo, indicar al Dr. Arauz que los recursos del Fondo del Sistema 2013 ya están asignados. Por lo tanto, se trasladará copia del oficio a las Rectorías para que consideren a lo interno de qué manera podrían participar en el encuentro.

Artículo 5. Carreras universitarias

a. Copias de notas dirigidas al CONESUP:

OPES-OF-207-2012-A de 20 de setiembre, 2012. Propuesta de la Universidad de Iberoamérica (UNIBE) para ofrecer la Maestría en Enfermería de Urgencias y Emergencias.

OPES-OF-208-2012-A de 20 de setiembre, 2012. Propuesta de la Universidad Libre de Costa Rica (ULICORI) para ofrecer la Licenciatura en Derecho.

SE TOMA NOTA.

b. Documento OPES-18-2012. Dictamen sobre la propuesta de creación de la Maestría en Ingeniería de Transporte y Vías de la Universidad de Costa Rica.

SE ACUERDA EN FIRME acoger las siguientes recomendaciones del documento OPES-18-2012:

- Que se autorice a la Universidad de Costa Rica para que imparta la Maestría en Ingeniería de Transporte y Vías.
- Que la Universidad de Costa Rica realice evaluaciones internas durante el desarrollo del posgrado.
- Que la OPES considere la evaluación del posgrado propuesto después de cinco años de iniciado.

c. Documento OPES-21-2012. Dictamen sobre la propuesta de actualización de la Maestría en Microbiología de la Universidad de Costa Rica.

Documento OPES-21-2012. Dictamen sobre la propuesta de actualización de la Maestría en Microbiología de la Universidad de Costa Rica.

SE ACUERDA EN FIRME acoger las recomendaciones del documento OPES-21-2012:

- Que se autoricen los planes de estudio actualizados, conforme se indica en el presente dictamen, para la Maestría en Microbiología, sin énfasis, y de los énfasis en Virología, Bacteriología y Micología Médica que tenía autorizada la Universidad de Costa Rica.
- Que la Universidad de Costa Rica realice evaluaciones internas durante el desarrollo del posgrado.
- Que la OPES considere la evaluación del posgrado propuesto después de cinco años de iniciado.

- d. Documento OPES-20-2012. Dictamen sobre la propuesta de creación de la Maestría en Inmunología de la Universidad de Costa Rica.

SE ACUERDA EN FIRME acoger las siguientes recomendaciones del documento OPES-20-2012:

- Que se autorice a la Universidad de Costa Rica para impartir la Maestría en Inmunología.
- Que la Universidad de Costa Rica realice evaluaciones internas durante el desarrollo del posgrado.
- Que la OPES considere la evaluación del posgrado propuesto después de cinco años de iniciado.

- e. Documento OPES-19-2012. Dictamen de la propuesta de apertura de la Licenciatura en Gestión de Negocios Turísticos Bilingüe de la Universidad Nacional.

SE ACUERDA EN FIRME acoger las siguientes recomendaciones del documento OPES-19-2012:

- Que se autorice a la Universidad Nacional para que imparta la Licenciatura en Gestión de Negocios Turísticos Bilingüe.
- Que la Universidad Nacional realice evaluaciones internas durante el desarrollo de la carrera.
- Que la OPES considere la evaluación de esta carrera después de cinco años de iniciado el nuevo plan de estudios.

- f. Documento OPES-22-2012. Dictamen sobre la propuesta de rediseño de la Maestría en Administración en Tecnología e Información (MATI) de la Universidad Nacional.

SE ACUERDA EN FIRME acoger las siguientes recomendaciones del documento OPES-22-2012:

- Que se autorice a la Universidad Nacional el rediseño de la Maestría en Administración en Tecnología de Información (MATI) y sus énfasis en Administración de Proyectos y en Gestión de Servicios y Productos TIC.
- Que la Universidad Nacional realice evaluaciones internas durante el desarrollo del Posgrado.

Artículo 6. Varios

- a. Universidad Nacional. Oficio R-2665-2012 de 20 de setiembre del 2012. La Universidad Nacional remite criterio solicitado sobre el Proyecto

SE TOMA NOTA de que las observaciones emitidas por Universidad Nacional al Proyecto "Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Terapias Alternativas de Costa Rica", expediente N°18.269, ya fueron incorporadas en el Dictamen No. OF-AL-060, elaborado por el Asesor Legal del CONARE.

- b. Copia de correo electrónico de 24 de setiembre de 2012 sobre la Universidad Iberoamericana (UNIBE).

SE TOMA NOTA y se traslada una copia al CONESUP.

- c. Copia del oficio de fecha 20 de setiembre, 2012 enviado al Ministerio de Educación Pública, por representantes de varias universidades privadas, de la Universidad de Costa Rica y el Presidente del Colegio de Terapeutas, quienes presentan queja administrativa contra la Universidad de San José por crear inconstitucionalmente título de “Técnico en Terapia Física”.

SE ACUERDA tomar nota y expresar el apoyo a la Universidad de Costa Rica con respecto a la queja administrativa interpuesta contra la Universidad de San José.

- d. Oficio CPC-068-2012 de fecha 17 de setiembre de 2012. Solicitud para reconocer al Colegio de Profesionales en Criminología como el ente fiscalizador calificado en la valoración de mallas curriculares, para la apertura de la carrera de Criminología en nuevas universidades.

SE ACUERDA EN FIRME aprobar la propuesta de respuesta elaborada por el Asesor Legal, la cual dice:

“ Me refiero al criterio solicitado mediante acuerdo tomado en artículo 3° de la sesión 25-12 sobre el acuerdo de Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Criminología, comunicado mediante oficio CPC-065-2012, en los siguientes términos:

El Colegio de Profesionales en Criminología fue creado mediante Ley número 8831 del 28 de abril de 2010. De conformidad con lo dispuesto en esta Ley, el Colegio debe velar por el cumplimiento estricto de las normas técnicas y de ética profesional de las personas que se colegien para el ejercicio de la Criminología (artículo 2°).

Dentro de los fines que se establecen en su artículo 3° se encuentra el constituirse en el ente regulador y fiscalizador del ejercicio profesional (inciso a), colaborar con el Estado, las instituciones de Educación Superior en el desarrollo de la Criminología, con el propósito de atender las necesidades del país (inciso f), emitir criterio técnico y evacuar las consultas sobre materias de su competencia, cuando sea consultado o por propia iniciativa (inciso g) y promover el intercambio académico, científico y profesional a fin de favorecer la divulgación, la enseñanza, el progreso y la actualización de los miembros del Colegio (inciso h).

El acuerdo N° 14 tomado por la Junta Directiva del Colegio en sesión 46/2012-2013 en el sentido de se le considere como “el ente fiscalizador calificado para valoración de mallas curriculares ... sea por apertura de la carrera en Criminología en nuevas universidades, por actualización de la malla curricular actual o por aquella justificación que consideren requiera del criterio técnico calificado de nuestra representada”, excede las competencia que le corresponde ejercer a un Colegio Profesional.

De conformidad con nuestro régimen constitucional, el ejercicio de la actividad académica, comprensiva del diseño curricular y la libre adopción de perfiles profesionales, compete ejercerlas a las instituciones de educación superior universitaria estatal en forma independiente bajo el régimen de su autonomía. Sobre éste se ha indicado que:

*“Conforme lo dispone el artículo 84 de la Constitución Política, las Universidades del Estado están dotadas de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Esa autonomía, que ha sido clasificada como especial, es completa y por esto, distinta de la del resto de los entes descentralizados en nuestro ordenamiento jurídico (regulados principalmente en otra parte de la Carta Política: artículos 188 y 190), y significa, para empezar con una parte de sus aspectos más importantes, que aquéllas están fuera de la dirección del Poder Ejecutivo y de su jerarquía, que cuentan con todas las facultades y poderes administrativos necesarios para llevar adelante el fin especial que legítimamente se les ha encomendado: que pueden autodeterminarse, en el sentido de que están posibilitadas para establecer sus planes, programas, presupuestos, organización interna y estructurar su gobierno propio. Tienen poder reglamentario (autónomo y **de ejecución**); pueden autoestructurarse, repartir sus competencias dentro del ámbito interno del ente, desconcentrarse en lo jurídicamente posible y lícito, regular el servicio que prestan, y decidir libremente sobre su personal (como ya lo estableció esta Sala en la resolución 495-92). Son estas las modalidades administrativa, política, organizativa, y financiera de la autonomía que corresponde a las universidades públicas. La autonomía universitaria tiene como principal finalidad, procurar al ente todas las condiciones jurídicas necesarias para que lleve a cabo con independencia su misión de cultura y educación superiores. En este sentido la universidad no es una simple institución de enseñanza (la enseñanza ya fue definida como libertad fundamental en nuestro voto número 3559-92), pues a ella corresponde la función compleja, integrante de su naturaleza, de realizar y profundizar la investigación científica, cultivar las artes y las letras en su máxima expresión, analizar y criticar, con objetividad, conocimiento y racionalidad elevados, la realidad social, cultural, política y económica de su pueblo y el mundo, proponer soluciones a los grandes problemas y por ello en el caso de los países subdesarrollados, o poco desarrollados, como el nuestro, servir de impulsora a ideas y acciones para alcanzar el desarrollo en todos los niveles (espiritual, científico y material), contribuyendo con esa labor a la realización efectiva de los valores fundamentales de la identidad costarricense, que pueden resumirse, según se dijo en el voto que se acaba de citar, en los de la democracia, el Estado Social de Derecho, la dignidad esencial del ser humano y el “sistema de libertad”, además de la paz (artículo 12 de la Constitución Política), y la Justicia (41 ídem); en síntesis, para esos propósitos es creada, sin perjuicio de las especialidades o materias que se le asignen, y nada menos que eso se espera y exige de ella. La anterior conceptualización no persigue agotar la totalidad de los elementos, pero de su contenido esencialmente se deduce –y es lo que se entiende quiso y plasmó el Constituyente en la Ley Fundamental- que la universidad como centro de pensamiento libre, debe y tiene que estar exenta de presiones o medidas de cualquier naturaleza que tiendan a impedirle cumplir, o atenten contra ese, su gran cometido.” (Sala Constitucional, Voto 1313—93)*

Igualmente, en el ámbito docente esta garantía constitucional de autonomía universitaria está respaldada adicionalmente por la libertad de cátedra, sobre la que se ha indicado:

*“Dentro de la modalidad docente explicada, también sirve de escudo a esa autonomía la **libertad de cátedra** (artículo 87 de la Constitución Política), se puede entender como la potestad de la universidad de decidir el contenido de la enseñanza que imparte, sin estar sujeta a lo dispuesto por poderes externos a ella, o bien, en el sentido de la facultad de los docentes universitarios de expresar sus ideas al interno de la institución, permitiendo la coexistencia de diferentes corrientes de pensamiento” (Sala Constitucional, voto 1313-93)*

Tanto la aprobación de carreras como su adaptación, modificación y evaluación constituyen competencias constitucionalmente atribuidas a las instituciones de educación superior universitaria estatal, cuyo ejercicio es irrenunciable, intransferible e imprescriptible, incluso frente al legislador ordinario. La Ley no puede eliminar o condicionar la independencia plena que estas instituciones poseen para el ejercicio de sus competencias sin resultar, por esa misma razón, viciada de inconstitucionalidad.

Por las razones anteriores, el acuerdo 14 tomado en sesión 46/2012-2013 por la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Criminología resulta contrario al régimen constitucional de autonomía universitaria y en tal sentido debe rechazarse.

Dejo en esta forma rendido el criterio solicitado.”

- e. Correo electrónico del 26 de setiembre, 2012. El Instituto de Investigación en Educación (INIE), de la Universidad de Costa Rica invita a la Jornada de Reflexión sobre Autonomía y Acreditación de la Educación Superior, los días 4 y 11 de octubre y el 1° de noviembre, 2012.

SE TOMA NOTA.

- f. Correo electrónico del 27 de setiembre, 2012. La Presidenta Ejecutiva de “Defensa de Niños y Niñas-Costa Rica, remite copia de Carta Abierta enviada a la Señora Presidenta de la República y al Señor Ministro de Justicia y Paz, sobre la grave situación que se da en el Centro Juvenil Zurquí.

EL DR. HENNING JENSEN recomienda dirigirse al señor Ministro de Justicia y Paz y expresarle preocupación por la situación que se denuncia.

SE ACUERDA enviar una nota al señor Ministro de Justicia manifestando preocupación por la denuncia de la señora Presidenta Ejecutiva de la Defensa de Niños y Niñas-Costa Rica con respecto a la situación que se está dando en el Centro Juvenil Zurquí.

Artículo 7. Asamblea Legislativa

Dictamen OF-AL-060 sobre el proyecto de “Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Terapias Alternativas de Costa Rica”, Expediente 18 269.

SE ACUERDA EN FIRME tomar nota del dictamen del Asesor Legal sobre el Proyecto de “Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Terapias Alternativas de Costa Rica”, Expediente 18 269, el cual dice:

“Me refiero al criterio solicitado mediante oficio CNR-301-12 y el oficio R-2665-2012,

relacionados con el proyecto de “Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Terapias Alternativas de Costa Rica”, expediente legislativo número 18.269, en los siguientes términos:

Dispone en lo que aquí interesa el proyecto de ley que formarán parte del Colegio todos los profesionales en terapias alternativas que posean el grado mínimo de licenciatura otorgado por una universidad pública o privada del país, o extranjera incorporados mediante reconocimiento, convalidación y equiparación según la normativa del CONARE, en alguna de las siguientes:

1. Aromaterapia
2. Digitopuntura o acupresión
3. Fitoterapia o herbolaria
4. Homeopatía
5. Terapia tradicional china
6. Naturopatía
7. Terapias florales
8. Terapia reiki

El listado queda abierto para la incorporación de otras terapias alternativas con tal que sean así reconocidas a futuro por parte de la Organización Mundial de la Salud.

En su transitorio primero el proyecto de ley indica que la primera Asamblea General se efectuará una vez que existan en el país al menos diez profesionales debidamente acreditados por CONARE, según lo indica su transitorio primero de la Ley.

Los diplomas otorgados por universidades extranjeras deben ser sometidos a reconocimiento y equiparación ante las instituciones de educación superior universitaria estatal por medio del CONARE. En este sentido el inciso b) del artículo 8° debe aclararse en tal sentido a fin de que se lea:

“ARTICULO 8.- MIEMBROS ACTIVOS ...

b) Los profesionales en terapias alternativas, con el grado mínimo de licenciatura universitaria, otorgado por una universidad extranjera, incorporados mediante reconocimiento y equiparación de su grado académico y título profesional por parte de la institución de educación superior universitaria estatal competente, según la normativa del CONARE.”

El requisito que contiene el proyecto de poseer grado mínimo de licenciatura resulta acorde con la naturaleza profesional del colegio que se pretende crear. No obstante, la nomenclatura de grados y títulos vigente en el país considera también de nivel profesional universitario el pregrado (diplomado universitario) así como el grado (bachillerato y licenciatura). El proyecto de Ley puede autorizar para el ejercicio legal de las terapias alternativas a quienes posean un grado previo a la licenciatura. A cada grado o pregrado se asocia un conjunto de tareas sobre las que el profesional posee competencias. Entre mayor sea el grado requerido será igualmente mayor el ámbito de competencias en el que quedan autorizados los profesionales miembros del Colegio.

Ahora bien, como en el país no se encuentra actualmente desarrollada ninguna de estas disciplinas dentro del quehacer universitario, se sugiere modificar el transitorio primero del proyecto de ley a fin de que indique:

“Transitorio.- Durante los primeros cinco años de vigencia de ley, se exonerará a los profesionales graduados en terapias alternativas del requisito de reconocimiento y equiparación según la normativa vigente en el CONARE. Durante ese tiempo, se podrán

admitir como miembros activos –en forma provisional, pero con el beneficio de todos los derechos de colegiado- a quienes acrediten:

- 1. Poseer un diploma universitario debidamente legalizado que le confiera el grado universitario requerido en esta Ley en cualesquiera de las terapias alternativas definidas en el artículo 4°;*
- 2. Que la institución que otorga el diploma posee carácter universitario en el país de origen;*
- 3. Que el grado conferido en el diploma habilita para el correspondiente ejercicio profesional en el país de origen.*

A requerimiento del Colegio o de los interesados, el CONARE podrá darles asesoría para la admisión de miembros activos provisionales, sin que ello prejuzgue el resultado final de las posteriores solicitudes de reconocimiento y equiparación que sean formalmente presentadas con fundamento en la misma documentación.

El plazo del presente transitorio se entenderá agotado y cumplido en el momento en que alguna de las instituciones integrantes del CONARE desarrolle las disciplinas asociadas a este Colegio, permitiendo a los miembros provisionales formalizar los trámites de reconocimiento y equiparación de sus grados y títulos. Si al vencimiento del plazo estipulado en este transitorio no se cumpliera esta condición, se entenderá que la Junta Directiva mantendrá esta prerrogativa hasta tanto sea creada la carrera o estudios universitarios indicados en este párrafo.”

Dejo en esta forma rendido el criterio solicitado.”

A las veinte horas se levanta la sesión.